

II. El entorno macroeconómico y social antes de MITCH.

La década de los 80,s, se consideró una década perdida para la economía y sociedad hondureña. La tasa de crecimiento anual del producto por habitante fue negativa (-0.9%) y la pobreza aumentó. Entre 1990 y 1995, el producto por habitante tuvo una leve mejoría (2% anual) y la incidencia de la pobreza disminuyó. No obstante, ambos son indicadores de creciente inestabilidad por la debilidad del aparato productivo para mantener o acelerar el ritmo de crecimiento económico y la alta concentración del ingreso que excluye a amplios sectores de la población, en especial rural, de los beneficios de la economía de mercado.

El 51 por ciento del territorio hondureño está cubierto de bosques, pero las tasas anuales de deforestación superan las 100,000 hectáreas. El mal aprovechamiento de este recurso, la presión social sobre las tierras frágiles y de frontera agrícola, los sistema de producción con prácticas desgradantes del suelo y la contaminación del ambiente y de las fuentes de agua, obstaculizan el logro del desarrollo sostenible. En conjunto con la agricultura y ganadería, el sector primario contribuye con el 50% del PIB y del empleo productivo, y sigue siendo el principal generador de divisas.

Con la ejecución del programa de estabilización y ajuste estructural en 1990, el país apostó a la ejecución de una política económica orientada a la corrección de los grandes desequilibrios macroeconómicos (monetarios y fiscales), estabilidad cambiaria, liberalización comercial y financiera, reforma estatal y la privatización. A partir de 1997, el país retomó la senda de la estabilización y el crecimiento económico, como también el compromiso de impulsar una reforma y modernización administrativa del Estado en sectores estratégicos con la participación de los agentes privados. El gobierno de la República esperaba para 1998, una tasa de crecimiento económico real de 5%, un déficit fiscal de 1%/PIB y una tasa de inflación anual de 14% por debajo de la tasa promedio para el período de 1990-1997, arriba de 20% anual.

La carga de la deuda externa, estimada en unos 3,780 millones de dólares, sigue afectando la capacidad financiera del Estado para enfrentar los déficit en salud.

educación y vivienda. Aún cuando se han reconocido importantes esfuerzos en materia de salud: reducción de tasa de mortalidad materna e infantil, aumento en la esperanza de vida, incremento en la cobertura de agua potable y saneamiento y de un mayor gasto por habitante, los servicios de salud sólo cubren al 50% de la población.

Se han ejecutado importantes programas de compensación social, orientados a crear empleos temporales y mejorar los ingresos monetarios de las familias más vulnerables frente a los cambios de políticas económicas; sin embargo, la falta de acceso a medios y recursos productivos para la población pobre, en especial rural, no ha permitido potenciar y generalizar las bondades de la economía de la mercado. El gobierno de la República, ha reconocido que las manifestaciones de la pobreza caracterizan a las familias pobres por el bajo nivel de ingreso, la desnutrición, la presencia de enfermedades infecciosas en los niños, la falta de vivienda, el hacinamiento y el bajo nivel educativo de las familias, por los que se deben enfatizar aquellas acciones que ataquen simultáneamente los factores causales y las características mas visibles del problema.